

SUP-REP-84/2023

HECHOS

PROBLEMAS JURÍDICOS: Determinar la constitucionalidad de los artículos 35 y 41 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE y, en consecuencia, si la UTCE tenía facultades para imponer una amonestación pública al presidente de la República, derivado de un supuesto incumplimiento de acatar una medida cautelar; revisar si la valoración del expediente fue exhaustiva y analizar la validez del acta circunstanciada.

Una senadora y el PRD presentaron una queja en contra de las expresiones emitidas por el presidente de la República en una conferencia matutina realizada el veintisiete de marzo. Los denunciantes consideraron que las declaraciones podían vulnerar la equidad en la contienda en los procesos electorales locales del Estado de México y Coahuila, por lo que solicitaron medidas cautelares.

Posteriormente, la Comisión determinó que las medidas eran procedentes y ordenó el retiro de las manifestaciones. En su momento, la Sala Superior confirmó la procedencia de las medidas. Derivado de lo anterior, Consejería y Comunicación Social enviaron diferentes oficios para informar el cumplimiento de las medidas ordenadas.

La UTCE inició el procedimiento de verificación y ordenó realizar un acta circunstanciada con la finalidad de certificar el contenido de diversas ligas de los perfiles de YouTube, Twitter y Facebook del Gobierno de México, sin embargo, determinó que las manifestaciones continuaban visibles, por lo que, después de dos apercibimientos, amonestó públicamente al presidente.

La consejera adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de Consejería, en representación del presidente de la República, impugna el acuerdo de la UTCE.

PLANTEAMIENTOS DE LA PARTE ACTORA

- Los artículos 35 y 41 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE son inconstitucionales, porque vulneran los principios de reserva de ley, seguridad jurídica y legalidad.
- La falta de exhaustividad en la valoración de las documentales que integran el expediente.
- La nulidad del acta circunstanciada.

RESUELVE

Razonamientos:

- Los artículos 35 y 41 del Reglamento de Quejas del INE se adoptaron como un ejercicio válido de la facultad reglamentaria del Consejo General del INE, pues implican un desarrollo de las bases legales del procedimiento sancionador en materia electoral.
- La UTCE sí valoró los elementos que integraban el expediente y los oficios que fueron remitidos por distintas áreas de presidencia.
- El actor no expone razones ni ofrece pruebas concretas para cuestionar el contenido del acta circunstanciada, sino que hace un señalamiento genérico de su nulidad.

Se **confirma** el acuerdo impugnado



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

**RECURSO DE REVISIÓN DEL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR**

EXPEDIENTE: SUP-REP-84/2023

RECURRENTE: CONSEJERA
ADJUNTA DE CONTROL
CONSTITUCIONAL Y DE LO
CONTENCIOSO DE LA CONSEJERÍA
JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL,
EN REPRESENTACIÓN DEL
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
UNIDAD TÉCNICA DE LO
CONTENCIOSO ELECTORAL DE LA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: REYES
RODRÍGUEZ MONDRAGÓN

SECRETARIA: ALEXANDRA D. AVENA
KOENIGSBERGER

COLABORÓ: EDITH CELESTE
GARCÍA RAMÍREZ

Ciudad de México, a XX de junio de dos mil veintitrés¹

Sentencia definitiva de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual se **confirma** el acuerdo dictado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral el veinte de abril, en el expediente UT/SCG/PE/KLR/CG/114/2023 y acumulado.

La decisión se sustenta en que: *i)* la facultad de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, de supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral y de imponer medidas de apremio, no es contraria a los principios de reserva de ley y seguridad jurídica; *ii)* la responsable fue exhaustiva en la valoración de los elementos que integran el expediente; y *iii)* el actor solo menciona de manera genérica la nulidad del acta

¹ De este apartado en adelante, las fechas se refieren al año 2023, salvo que se haga otra precisión.

circunstanciada por medio de la cual la autoridad responsable advirtió que el material objeto de la medida cautelar seguía visible.

ÍNDICE

GLOSARIO	2
1. ASPECTOS GENERALES.....	3
2. ANTECEDENTES	3
3. TRÁMITE	5
4. COMPETENCIA	5
5. PROCEDENCIA	6
6. ESTUDIO DE FONDO.....	7
6.1. Planteamiento del caso	7
6.1.1. Acuerdo impugnado	8
6.1.2. Planteamientos de la parte actora	9
6.1.3. Problemas jurídicos y metodología.....	11
6.2. Consideraciones de la Sala Superior.....	12
6.2.1. La facultad de la UTCE de supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión y de imponer medidas de apremio es conforme a la Constitución general	12
6.2.2. La autoridad responsable valoró de forma exhaustiva las documentales que integran el expediente	17
6.2.3. Nulidad del contenido y alcance del acta circunstanciada del veinte de abril	22
7. RESOLUTIVO	23

GLOSARIO

Comisión:	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Consejería:	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Constitución general:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
INE:	Instituto Nacional Electoral
LEGIPE:	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales



Ley de Medios:	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
Ley Orgánica:	Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
PRD:	Partido de la Revolución Democrática
Reglamento:	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
SCJN:	Suprema Corte de Justicia de la Nación
UTCE:	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral

1. ASPECTOS GENERALES

- (1) La Comisión aprobó la adopción de la medida cautelar, por lo que se le ordenó al presidente de la República que eliminara de distintos medios las manifestaciones denunciadas, las cuales fueron realizadas en la conferencia matutina del veintisiete de marzo. Esta decisión fue confirmada por esta Sala Superior mediante la resolución que recayó en el SUP-REP-64/2023.
- (2) Derivado de distintos oficios presentados por las áreas adscritas a la presidencia, para informar del cumplimiento de la medida cautelar, la UTCE inició un procedimiento de verificación y ordenó la elaboración de un acta circunstanciada, concluyendo que las manifestaciones denunciadas seguían siendo visibles. Por ello, y después de dos apercibimientos, impuso una amonestación pública al presidente y realizó un nuevo requerimiento para que se cumpliera con la medida.
- (3) Derivado de lo anterior, la parte actora reclama la inaplicación de los artículos 35 y 41 del Reglamento, ya que considera que son inconstitucionales. Asimismo, alega una falta de exhaustividad en el análisis probatorio de la responsable y, finalmente, solicita la nulidad del acta circunstanciada por medio de la cual se verificó el incumplimiento de la medida cautelar.

2. ANTECEDENTES

- (4) **2.1. Primera denuncia.** El veintiocho de marzo, la senadora Kenia López Rabadán denunció al presidente de la República, así como a quien resultara

responsable, por el presunto uso indebido de recursos públicos y la violación al principio de equidad en la contienda, en detrimento de los procesos electorales locales de Coahuila y el Estado de México, así como del próximo proceso electoral federal 2023-2024 y las elecciones concurrentes, derivado de manifestaciones que el denunciado hizo en la conferencia matutina del veintisiete de marzo.

- (5) Además, solicitó el dictado de medidas cautelares, a efecto de que se ordenara al presidente de la República abstenerse de emitir manifestaciones similares a las realizadas.
- (6) **2.2. Segunda denuncia.** El veintinueve de marzo, el PRD, por conducto de su representante ante el Consejo General del INE, también denunció al presidente de la República por los mismos hechos, ya que consideró que se dio la presunta vulneración a los principios de neutralidad y de imparcialidad, por el uso debido de recursos públicos.
- (7) Asimismo, solicitó el dictado de medidas cautelares para que se eliminara la parte de la mañanera en la que el denunciado llama a la ciudadanía a no votar por la oposición, por ser manifestaciones ilícitas que vulneran el principio de neutralidad.
- (8) **2.3. Adopción de una medida cautelar (Acuerdo ACQyD-INE-42/2023).** El treinta de marzo, la Comisión, de entre otros aspectos, consideró procedente la adopción de medidas cautelares e improcedente la tutela preventiva solicitada.
- (9) **2.4. Confirmación del acuerdo de la Comisión (SUP-REP-64/2023 y acumulado).** El siete de abril, esta Sala Superior confirmó el acuerdo de medidas cautelares, identificado en el punto anterior.
- (10) **2.5. Acuerdo de verificación y elaboración de acta circunstanciada.** El once de abril, derivado del estado procesal del asunto, la UTCE emitió un acuerdo dentro del expediente, para verificar la remoción de las manifestaciones denunciadas y ordenó la elaboración de un acta circunstanciada. Al advertir que las manifestaciones continuaban vigentes hizo un requerimiento y señaló que, en caso de incumplimiento, impondría una amonestación.
- (11) **2.6. Oficio de instrucciones (Oficio 114.CJEF.CACCC.2023.08508).** Como resultado del acuerdo de la UTCE del once de abril, en la misma



fecha, el director general de Defensa Jurídica Federal de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó un oficio para informar a la Comisión sobre las acciones realizadas a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo ACQyD-INE-42/2023.

- (12) **2.7. Oficio de supuesto cumplimiento (Oficio CGCSyVGR/064/2023).** El doce de abril, el coordinador general de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República envió un oficio para informar a la Comisión sobre las acciones realizadas a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de medidas cautelares, en atención a la instrucción de cumplimiento del acuerdo del once de abril.
- (13) **2.8. Emisión del acuerdo controvertido y acta circunstanciada.** El veinte de abril, la UTCE dictó el acuerdo que se pretende controvertir en el asunto, a través del cual amonestó públicamente al denunciado, dado que no cumplió con las medidas cautelares ordenadas, ni con el requerimiento formulado, además, determinó la elaboración de otra acta circunstanciada.
- (14) **2.9. Interposición del recurso.** El veintiocho de abril, Claudia Angélica Nogales Gaona, consejera adjunta de control constitucional y de lo contencioso de la Consejería, en representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, interpuso el presente recurso en contra del acuerdo identificado en el punto previo, ante esta Sala Superior.

3. TRÁMITE

- (15) **3.1. Turno.** Posteriormente, el magistrado presidente ordenó integrar el expediente SUP-REP-84/2023 y turnarlo a la ponencia a su cargo.
- (16) **3.2. Radicación, admisión y cierre.** En su oportunidad, el magistrado instructor radicó el expediente en su ponencia y realizó el trámite correspondiente, conforme a lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley de Medios.

4. COMPETENCIA

- (17) Esta Sala Superior es competente para conocer y, en su caso, resolver el recurso, porque se pretende controvertir una determinación que tiene una relación con la adopción de medidas cautelares en el marco de un procedimiento especial sancionador, cuya revisión está reservada –en exclusiva– a esta autoridad jurisdiccional. Lo anterior, con fundamento en

los artículos 41, párrafo tercero, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución general; 166, fracción X, y 169, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 3, párrafo 2, inciso f); 4, párrafo 1, y 109, párrafo 2, de la Ley de Medios.

5. PROCEDENCIA

- (18) Esta Sala Superior considera que el recurso es procedente, porque reúne los requisitos formales y generales previstos en los artículos 8, 9, párrafo 1, 13, párrafo 1 y 109, párrafo 1, de la Ley de Medios, en relación con el artículo 110 del mismo ordenamiento, tal como se razona en los siguientes párrafos.
- (19) **5.1. Forma.** El recurso se interpuso por escrito ante esta Sala Superior; consta la denominación del recurrente, así como el nombre y la firma de quien promueve en representación; se identifica el acto reclamado; se mencionan los hechos y agravios que presuntamente le ocasiona, y cuentan con la firma autógrafa.
- (20) **5.2. Oportunidad.** En el caso, es aplicable el plazo genérico de cuatro días previsto en el artículo 8 de la Ley de Medios para la interposición de los recursos, en atención a que no se prevé un plazo para impugnar actos o resoluciones que estén vinculados con el otorgamiento de medidas cautelares, que no sean la resolución que las otorga o niega, de conformidad con una aplicación por analogía de la Jurisprudencia 11/2016, de rubro **RECURSO DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL PLAZO PARA IMPUGNAR LOS ACUERDOS DE DESECHAMIENTO O INCOMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA DENUNCIA, ES DE CUATRO DÍAS.**²
- (21) El acuerdo impugnado se le notificó al recurrente el veinticuatro de abril, mientras que el recurso se presentó el veintiocho siguiente, por lo cual es evidente que se atendió al plazo legal.
- (22) Criterios similares se han adoptado en los recursos SUP-REP-54/2022, SUP-REP-71/2022, SUP-REP-126/2021, entre otros.
- (23) **5.3. Legitimación y personería.** Se cumple con este presupuesto, porque la promovente acude en su carácter de consejera adjunta de control

² Disponible en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 43, 44 y 45.



constitucional y de lo contencioso de la Consejería, como representante del presidente, ya que cuenta con esta facultad legal.³

(24) De esta manera, es infundada la causal de improcedencia que manifiesta la autoridad responsable, consistente en falta de legitimación activa, porque la parte actora fue autoridad responsable ante esa instancia. Si bien ante la UTCE fue la parte denunciada, el acto que ahora se controvierte sí le genera una posible afectación, por lo cual se justifica que promueva este medio de impugnación.

(25) **5.4. Interés jurídico.** Se actualiza porque mediante el acuerdo impugnado se estableció una amonestación pública dirigida al presidente de la República, derivado de un presunto incumplimiento de una medida cautelar.

(26) **5.5. Definitividad.** Esta Sala Superior ha considerado que los acuerdos de la UTCE en los que se valora el incumplimiento de medidas cautelares deben considerarse definitivos y firmes para la procedencia de los recursos de revisión, ya que no existe otro medio de impugnación que deba ser agotado previamente y que permita una restitución de los derechos posiblemente afectados⁴.

6. ESTUDIO DE FONDO

6.1. Planteamiento del caso

(27) La controversia tiene su origen en las denuncias presentadas por una senadora y por el PRD, en contra de las expresiones emitidas por el presidente de la República en una conferencia matutina realizada el veintisiete de marzo. A continuación, se expone el contenido de las manifestaciones denunciadas:

Presidente de la República: *...ahora hay un plan C, que no estén pensando que ya terminó todo.*

Interlocutor: *¿Cuál es?*

Presidente de la República: *Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, si a la transformación. Ese es el plan C, ese ya lo aplicamos en el 18, fue el pueblo el que dijo 'basta' y se inició la transformación...*

³ Artículos 2, fracción II y 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como 4 y 15, fracción IV, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Además, se le reconoció esta calidad en el expediente SUP-REP-64/2023.

⁴ Véase las sentencias SUP-REP-196/2016, SUP-REP-121/2018 y acumulados; así como SUP-REP-166/2020, SUP-REP-54/2020.

- (28) Los denunciantes consideraron que las declaraciones podían vulnerar el principio de equidad en la contienda electoral relativa a los procesos electorales locales en Coahuila y Estado de México que actualmente están en desarrollo. Al respecto, el partido denunciante solicitó que se eliminaran las declaraciones como medida cautelar.
- (29) La Comisión determinó la procedencia de la medida cautelar solicitada por el PRD, por lo que ordenó al presidente de la República que, de inmediato, por sí o a través de las personas facultadas para ello, realizara las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar de los archivos de audio, audiovisuales y/o versiones estenográficas de la referida conferencia matutina o modificar los referidos archivos a efecto de que sean suprimidas las manifestaciones señaladas. Esta Sala Superior convalidó el acuerdo emitido por la Comisión en la sentencia dictada en los expedientes **SUP-REP-64/2022 y acumulado**.
- (30) Posteriormente, Consejería y Comunicación Social enviaron diferentes oficios para informar el cumplimiento de las medidas ordenadas. Derivado de lo anterior, la UTCE inició el procedimiento de verificación y ordenó realizar un acta circunstanciada con la finalidad de certificar el contenido de diversas ligas de los perfiles de YouTube, Twitter y Facebook del Gobierno de México, para verificar la supresión de las manifestaciones denunciadas. Durante la diligencia encontró que las manifestaciones se replicaron en la videograbación denominada “Resumen de las conferencias matutinas del 27 al 31 de marzo de 2023”. En consecuencia, la Comisión emitió un acuerdo en el que ordenó, de nueva cuenta, el cumplimiento de la medida cautelar y amonestó públicamente al presidente, el cual ahora se impugna ante esta Sala Superior.

6.1.1. Acuerdo impugnado

- (31) La UTCE valoró tanto los oficios de respuesta como el acta circunstanciada y determinó el incumplimiento de la medida cautelar dictada por la Comisión, con base en las siguientes razones:
- Las manifestaciones denunciadas continuaban vigentes en el perfil de Twitter del Gobierno de México, a través del resumen de las conferencias matutinas del 27 al 31 de marzo.



- En los acuerdos del treinta de marzo, cuatro y once de abril se le apercibió que, de no cumplir con lo ordenado, se le impondría una medida de apremio.
- Se constató la subsistencia de las manifestaciones que dieron lugar a este procedimiento y su réplica en la videograbación del resumen.
- En el acuerdo del once de abril se le requirió al presidente de la República el cumplimiento del acuerdo de medidas cautelares.

Por tanto, se amonestó públicamente al denunciado y se formuló un nuevo requerimiento para que cumpliera con la medida cautelar ordenada.

6.1.2. Planteamientos de la parte actora

- (32) La consejera adjunta de control constitucional y de lo contencioso de la Consejería, en representación del presidente de la República, interpuso el presente recurso en contra de la determinación de la UTCE. Su pretensión es que se revoque la amonestación pública y el acuerdo impugnado, para lo cual expone los siguientes argumentos:

i) Inconstitucionalidad del artículo 41 del Reglamento por violar los principios de reserva de ley y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14, 35, fracción IX, numeral 8°, y 134, último párrafo, de la Constitución general

- (33) Considera que, a través de una norma reglamentaria, se le otorgan facultades a la UTCE, como autoridad instructora, de atribuciones que no le dio el legislador, particularmente, la de imponer medidas de apremio. En ese sentido, sostiene que para que una autoridad pueda emitir actos que afecten o trasciendan a los derechos fundamentales de las personas, esta facultad debe preverse en una norma jurídica formal y materialmente legislativa.
- (34) Por tanto, considera que la regla prevista en el artículo 41 del Reglamento trasgrede el principio de reserva de ley, ya que la norma reglamentaria no puede ir más allá de la ley, cuya emisión le corresponde al Congreso.
- (35) En cuanto a los principios de legalidad y seguridad jurídica, señala que la amonestación es una sanción, por lo que las normas deben establecer los

elementos necesarios para que la actuación de la autoridad sea acorde a esos principios y no sean arbitrarias.

- (36) Particularmente, considera que el acuerdo de la UTCE fue arbitrario, ya que impone medidas de apremio que califica de indebidas al presidente, dado que, desde su perspectiva, la Comisión es el único órgano facultado para dictar las medidas cautelares dentro de un procedimiento sancionador, pero, en ningún momento, el legislador le dio atribuciones a esa autoridad para la imposición de medidas de apremio, sino que solo está encargada del trámite.

ii) Inconstitucionalidad del artículo 35 del Reglamento por violar el principio de legalidad

- (37) Al respecto, sostiene que las medidas de apremio deben estar previstas en una ley, en la cual se prevean los elementos necesarios para generar certidumbre en su aplicación y evitar que ese poder de coerción se aplique sin límite alguno.
- (38) Además, señala que en la Constitución general se establece que para la creación de tipos administrativos o, en su caso, medidas de apremio, debe establecerse en una ley y no puede hacerlo el INE, ya que es una autoridad administrativa.
- (39) Considera que se vulnera el principio de reserva de ley, dado que la LEGIPE no prevé un procedimiento que regule el cumplimiento de las medidas cautelares y, menos aún, la imposición de medidas de apremio, por lo que estima que este supuesto se desarrolla de manera indebida en los artículos 35 y 41 del Reglamento. En este sentido, sostiene que la autoridad administrativa pretende otorgarse a sí misma herramientas coercitivas o sancionadoras para hacer cumplir sus resoluciones, siendo que no puede usurpar esas funciones al no estar previstas en la legislación de la materia.
- (40) Por tanto, solicita se “desaplique” en el caso concreto los artículos 35 y 41 del Reglamento.

iii) Falta de exhaustividad en la valoración de las documentales que integran el expediente

- (41) Manifiesta que el titular del Ejecutivo Federal cumplió en tiempo y forma con el requerimiento que se le formuló el 11 de abril, puesto que, mediante el



Oficio 114.CJEF.CACCC.2023.08501 del 12 de abril, el presidente solicitó a la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República que llevara a cabo las acciones, trámites y gestiones necesarias para cumplir con el requerimiento en el plazo establecido. Dicha instrucción la dio, porque el presidente se encuentra imposibilitado para realizar las acciones materia del requerimiento, pues la Coordinación es la responsable de administrar las plataformas oficiales de la Presidencia de la República.

- (42) Por ello, se debe revocar la amonestación pública, puesto que está acreditado que el presidente cumplió en tiempo y forma con el requerimiento formulado.

iv) Nulidad del contenido y alcance del acta circunstanciada del 20 de abril, ya que en esa fecha se habían eliminado las ligas electrónicas solicitadas, además, de que las firmas del acuerdo impugnado y la que consta en el acta circunstanciada no son coincidentes

- (43) Sostiene que la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República llevó a cabo las gestiones necesarias para eliminar los archivos requeridos, incluida la videograbación del resumen de las conferencias matutinas.
- (44) Además, señala que existe diferencia entre las firmas del acuerdo impugnado y las del acta circunstanciada, por lo que el acta carece de certeza respecto a los hechos que pretende verificar.
- (45) De lo anterior, se desprende que el problema jurídico en este recurso es determinar: **i)** si los artículos 35 y 41 del Reglamento son constitucionales y si, por tanto, fue válido que la UTCE impusiera una amonestación pública al actor y **ii)** si la autoridad responsable valoró adecuadamente las pruebas ofrecidas por el actor que pretendían mostrar el cumplimiento de lo ordenado en la medida cautelar.

6.1.3. Problemas jurídicos y metodología

- (46) Con base en lo expuesto, en este asunto se plantean los problemas jurídicos siguientes: **i) determinar** si los artículos 35 y 41 del Reglamento son acordes a la Constitución y, en consecuencia, si la UTCE tenía

facultades para imponer al presidente la amonestación pública, derivado del incumplimiento de una medida cautelar; **ii) revisar** si se hizo una valoración exhaustiva de los elementos del expediente, y **iii) analizar** la validez del acta circunstanciada.

- (47) Por razón de método, los planteamientos expuestos en el primer y segundo agravio se estudian en conjunto, al estar relacionados con la inconstitucionalidad de diversas disposiciones del Reglamento; posteriormente, se estudian el tercer y cuarto agravio, en el mismo orden que presentó la parte actora.
- (48) El método propuesto no le genera algún perjuicio al actor, conforme a lo determinado en la Jurisprudencia 4/2000, de rubro **AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN**.⁵

6.2. Consideraciones de la Sala Superior

- (49) Esta Sala Superior considera que se debe **confirmar** el acuerdo impugnado, ya que los agravios del actor son infundados e inoperantes, tal como se explica a continuación.

6.2.1. La facultad de la UTCE de supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión y de imponer medidas de apremio es conforme a la Constitución general

- (50) La parte actora sostiene que los artículos 35 y 41 del Reglamento son inconstitucionales, porque le dan atribuciones a la UTCE que no le concedió la legislatura, particularmente, la atribución de revisar el cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión.
- (51) Por ello, estima que estos artículos son contrarios a los principios constitucionales de reserva de ley, legalidad y seguridad jurídica, pues considero que esta facultad no se puede regular por un instrumento normativo de la autoridad administrativa.
- (52) El agravio es **infundado**, ya que esta Sala Superior ha sostenido que los artículos 35 y 41 del Reglamento se adoptaron como un ejercicio válido de la facultad reglamentaria del Consejo General del INE, pues implican un

⁵Jurisprudencia disponible en *Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación*, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6.



desarrollo de las bases legales del procedimiento sancionador en materia electoral.⁶ Por lo tanto, no resulta contrario a los principios de reserva de ley, legalidad y seguridad jurídica.

- (53) En primer lugar, el procedimiento especial sancionador en materia electoral es la vía adecuada para conocer de los posibles actos que pretendan influir y vulnerar la equidad en la contienda. Además, la normativa que rige ese tipo de procedimientos sancionadores también contempla la posibilidad de adoptar medidas cautelares por parte de la Comisión.
- (54) Segundo, en la Constitución general, así como en diversos ordenamientos legales se ha reconocido la facultad reglamentaria a favor de diversos órganos de la administración pública o de carácter autónomo. Esta facultad consiste en la posibilidad de emitir actos materialmente legislativos, con características de generalidad, abstracción e impersonalidad, y responde a la necesidad de que determinados órganos establezcan un marco normativo que les permita desempeñar de manera adecuada las atribuciones que les concede la ley.
- (55) Esta potestad reglamentaria es congruente con el principio de legalidad en la medida en que está supeditada a que haya una disposición constitucional o legal que la prevea,⁷ además de que debe desplegarse conforme a ciertos límites. Dentro de los límites en los que se deben sujetar las autoridades administrativas en el ejercicio de su facultad reglamentaria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el primero de ellos es el subprincipio de reserva de ley, el cual se presenta cuando “una norma constitucional reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, por lo que excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza distinta [...]”.⁸
- (56) En ese sentido, esta autoridad jurisdiccional no identifica ninguna disposición constitucional que establezca de forma explícita que la

⁶ Véase, de entre otros, el SUP-REP-54/2022.

⁷ Sirve de apoyo la jurisprudencia 1/2000, de rubro **FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN REGLAMENTARIA**. *Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación*, Suplemento 4, Año 2001, páginas 16 y 17.

⁸ En términos de la Tesis de Jurisprudencia de rubro **FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES**. 9ª época; Pleno, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, mayo de 2007, T XXV, p. 1515, número de registro 172521.

regulación relativa a los procedimientos sancionadores en el marco de los procesos electorales esté reservada a la legislación de la materia, de forma que resulta válido que lo reglamente la autoridad administrativa electoral.

- (57) Tercero, existe el **reconocimiento expreso de una facultad reglamentaria del Consejo General del INE en materia de quejas y procedimientos sancionadores.**
- (58) Conforme a lo dispuesto en el artículo 44, párrafo 1, inciso a), de la LEGIPE se contempla como una de las atribuciones del Consejo General la aprobación y expedición de los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de sus facultades. Por otra parte, en el inciso ii) del mencionado precepto legal se establece la facultad de emitir un reglamento de **quejas**, así como la facultad de emitir los acuerdos necesarios para hacer efectivas estas atribuciones y las demás señaladas en la propia ley o en otra legislación aplicable. Además, en el artículo 459 de la LEGIPE se establece que los órganos competentes para la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores son el Consejo General, la Comisión y la UTCE.
- (59) De esta manera, se advierte que el Reglamento se emitió en ejercicio de la esa facultad reglamentaria. De ahí que, si el acuerdo controvertido se emitió con fundamento en los artículos 35 y 41 de dicha normativa y el contenido de estas disposiciones se estableció en ejercicio de la facultad reglamentaria prevista, estas disposiciones no exceden de las atribuciones que el legislador le confirió a la autoridad administrativa.
- (60) Si bien, la parte actora sostiene que en la ley no se contempla que la UTCE pueda revisar el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas por la Comisión, ni la posibilidad de imponer medidas de apremio, esta Sala Superior advierte que, como se señaló, las disposiciones controvertidas del Reglamento encuentran cobertura en el despliegue de la facultad reglamentaria por parte del Consejo General del INE, considerando que la legislación reconoce expresamente esa atribución con respecto a la regulación de las quejas y procedimientos sancionadores en materia electoral.
- (61) Aunado a lo anterior, esta Sala Superior ha considerado que los medios de apremio no constituyen sanciones para las partes, sino medidas procesales dirigidas a lograr, de manera coercitiva, el cumplimiento de lo ordenado,



tanto en cualquiera de las resoluciones emitidas durante la instrucción como en la resolución final que se dicte en el procedimiento,⁹ por lo que no se está generando la creación de un tipo administrativo como lo sostiene la parte actora.

- (62) En términos generales, puede decirse que los medios de apremio constituyen instrumentos que pueden imponerse para hacer cumplir las determinaciones de la autoridad, siempre que lo hagan fundada y motivadamente.¹⁰
- (63) Así, la validez de la normativa controvertida no solo obedece a la amplia facultad reglamentaria del INE en materia de quejas y denuncias, sino sobre todo a que el contenido de los artículos 35 y 41 del Reglamento únicamente tienen por finalidad desarrollar el contenido de diversas disposiciones de la LEGIPE y dotarlas de efectividad, por lo cual son válidas.
- (64) Finalmente, la verificación del debido cumplimiento de las medidas cautelares puede considerarse como parte del trámite de los procedimientos sancionadores, la cual corresponde con la naturaleza de la competencia material de la UTCE para la tramitación de los procedimientos sancionadores, en términos de los artículos 51, párrafo 2, y 459, párrafo 1, inciso c), de la LEGIPE.
- (65) En este sentido, la valoración con respecto al debido cumplimiento de las medidas cautelares no implica que la UTCE asuma un papel de autoridad resolutoria, sino que únicamente verifica si los sujetos vinculados cumplieron con las conductas previamente ordenadas por la Comisión y adopta las medidas orientadas a su efectividad, por lo cual es válido que en el Reglamento se conceda dicha atribución a la UTCE¹¹.
- (66) Criterios similares se han sostenido en los recursos SUP-REP-54/2022, SUP-REP-71/2022, SUP-REP-97/2022, entre otros.

⁹ Véase la sentencia SUP-REP-196/2016.

¹⁰ Sirve de sustento a lo anterior las razones de la tesis jurisprudencial 1ª./J. 94/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PUEDE IMPONERSE LAS VECES QUE EL JUZGADOR CONSIDERE ENCESARIAS PARA HACER CUMPLIR SUS DETERMINACIONES. Registro digital 162648.

¹¹ En el artículo 3, párrafo 1, fracción II, del Reglamento se establece que en dicho ordenamiento se regula el procedimiento especial sancionador, únicamente en cuanto a su trámite y sustanciación.

- (67) Resulta relevante señalar que esta decisión es conforme a la línea jurisprudencial que esta Sala Superior ha venido desarrollando respecto de la facultad del Instituto de hacer cumplir sus determinaciones relacionadas con el dictado de medidas cautelares.
- (68) En diversos precedentes, citados previamente, esta Sala Superior ha validado la posibilidad de imponer medidas de apremio dictadas por parte de la UTCE al titular del Ejecutivo Federal, al considerar que se trata de un instrumento para dotar de efectividad a las determinaciones que tienen por finalidad evitar que se materialice un daño grave e irreparable sobre los bienes jurídicos en la materia electoral. En específico, porque no se trata de una sanción en sentido estricto.
- (69) En efecto, se ha sostenido que las medidas de apremio son un conjunto de instrumentos jurídicos con los que cuentan las autoridades administrativas y jurisdiccionales, para hacer cumplir sus resoluciones¹².
- (70) Se distinguen de una sanción, en sentido estricto, en la medida en que buscan lograr el cumplimiento de una resolución, y no buscan sancionar una conducta ante la determinación de su ilegalidad.
- (71) En esta medida, se considera que la decisión aquí adoptada no implica validar la imposición de una sanción, sino como ya se ha señalado, busca garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas previamente.
- (72) Bajo esta lógica, si este tribunal ya ha confirmado acuerdos emitidos por la misma autoridad responsable en la que se ha apercibido al titular del Ejecutivo Federal a que, de incumplir con la medida cautelar dictada se le impondrá una medida de apremio de las previstas en el reglamento de quejas, resulta consistente confirmar el acuerdo impugnado en este recurso, por medio del cual se está haciendo efectivo el apercibimiento y se está imponiendo una medida de apremio.
- (73) De ahí que resulta **infundado** este agravio.

¹² Ver SUP-REC-1425/2021.



6.2.2. La autoridad responsable valoró de forma exhaustiva las documentales que integran el expediente

- (74) A juicio del actor, la autoridad responsable no valoró diversos oficios remitidos que, a su juicio, dieron cuenta de que el titular del Ejecutivo Federal realizó todas las acciones necesarias para dar cumplimiento a la medida cautelar previamente impuesta.
- (75) Señala, además, que esta falta de valoración probatoria derivó en que la responsable no advirtiera que el presidente de la República está imposibilitado para realizar las acciones materia del requerimiento, porque de esto le corresponde a la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, ya que esta es quien administra las plataformas oficiales de la presidencia.
- (76) A juicio de esta Sala Superior, es **infundado** el agravio planteado porque, como se mostrará a continuación, la autoridad responsable sí analizó exhaustivamente los oficios señalados **por la parte actora**, y fue correcto que llegara a la conclusión de que la medida cautelar dictada continuaba sin cumplirse.
- (77) De las constancias que obran en el expediente, se advierte lo siguiente:
- (78) El treinta de marzo de este año se emitió el Acuerdo ACQyD-INE/42/2023, por medio del cual se consideró procedente la solicitud de una medida cautelar dirigida al presidente de la República, tal y como se sintetizó en el apartado **6.1.1** de esta ejecutoria.

- Primer oficio de supuesto cumplimiento y primer apercibimiento

- (79) El treinta y uno de marzo siguiente, la autoridad responsable recibió un oficio¹³ por parte de la Coordinación General de Comunicación Social, por medio del cual informó que ya había eliminado la información contenida en las distintas plataformas y, por tanto, que ya había cumplido con lo ordenado por la Comisión.
- (80) El cuatro de abril, la UTCE ordenó que se levantara un acta circunstanciada a efectos de verificar si, como lo señaló el coordinador general de

¹³ Identificado con el folio CGCSyVGR/054/2023, disponible en la foja 246 del expediente electrónico

Comunicación Social, se había dado cumplimiento a la medida cautelar ordenada¹⁴. En esa misma fecha, la UTCE emitió un acuerdo¹⁵ en el cual señaló que, como resultado del acta circunstanciada, se constató que en el sitio web del presidente de la República (www.presidente.gob.mx) se encontraba habilitado un banner (vínculo de alojamiento y reproducción) que contenía el audio de la conferencia de prensa matutina del veintisiete de marzo, en el que se advertían las declaraciones materia del procedimiento sancionador. Es decir, se encontraban las expresiones que se habían solicitado eliminar.

- (81) Asimismo, se advirtió que en el sitio web <http://lopezobrador.org.mx> se encontraba la versión estenográfica, así como un banner de la conferencia de prensa matutina del veintisiete de marzo, en el que se advertían las declaraciones materia del presente procedimiento sancionador.
- (82) Así, la responsable señaló que con el fin de asegurar el debido cumplimiento de la medida cautelar ordenada, se debía requerir a Andrés Manuel López Obrador en su carácter de presidente de la República, a efecto de que, de inmediato o a través de las personas facultadas para ello, y en un plazo no mayor a seis horas, realizara las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar de los archivos de audio, audiovisuales y/o versiones estenográficas de la conferencia matutina realizada el veintisiete de marzo pasado. O bien, que modificara esos archivos para que se suprimieran esas manifestaciones.
- (83) Además, **se le apercibió** de que, de no dar cumplimiento a lo ordenado en ese oficio, se le podría imponer una medida de apremio consistente en una amonestación pública, de conformidad con el artículo 35, párrafo 3, del Reglamento.

- **Segundo oficio de supuesto cumplimiento y segundo apercibimiento**

- (84) Posteriormente, el once de abril el coordinador general de Comunicación Social remitió un oficio¹⁶ en el que informó que había girado instrucciones para llevar a cabo las acciones, trámites y gestiones necesarias para

¹⁴ El acta circunstanciada se encuentra visible a partir de la foja 256 del expediente electrónico

¹⁵ Visible a partir de la foja 249 del expediente electrónico.

¹⁶ CGCSyVGR/059/2023 visible en la foja 310 del expediente electrónico



eliminar o modificar los archivos requeridos, en términos de lo ordenado por la UTCE en el acuerdo del cuatro de abril.

- (85) En específico, comunicó que del sitio web <http://presidente.gob.mx> que contenía la versión estenográfica de la conferencia matutina objeto del procedimiento sancionador, se advertía que había sido eliminado y, por lo tanto, ya no se encontraba visible. No obstante, respecto del sitio web <http://lopezobrador.org.mx> se señaló que esa página no forma parte de las plataformas oficiales de la Oficina de la Presidencia de la República.
- (86) Así, solicitó que se tuviera por cumplido lo ordenado y, por tanto, se dejara sin efectos el apercibimiento decretado.
- (87) El mismo once de abril, la UTCE emitió un acuerdo¹⁷ en el que ordenó la elaboración de un acta circunstanciada para efectos de verificar si se encontraba cumplida la medida cautelar decretada. Como resultado de esto, advirtió que en los perfiles de YouTube, Facebook y Twitter del Gobierno de México se encontraba publicada una videograbación denominada “Resumen de las conferencias matutinas del veintisiete al treinta y uno de marzo de 2023”. En ese resumen se advierte las declaraciones del presidente de la República materia del procedimiento sancionador, aproximadamente en los minutos 2:16 a 2:44.
- (88) Por tanto, con el fin de asegurar el debido cumplimiento de la medida cautelar ordenada, se volvió a requerir a Andrés Manuel López Obrador para que, por sí o a través de las personas facultadas para ello, en un plazo que no podría exceder las tres horas a partir de la notificación, realizara las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar el material denunciado, específicamente el contenido en el video denominado “Resumen de las conferencias matutinas del veintisiete al treinta y uno de marzo de 2023”, en los minutos 2:16 a 2:44. Esto, al considerar que se trataba de las mismas manifestaciones que habían sido objeto de la medida cautelar decretada.
- (89) Además, **se le volvió a apercibir** de que, en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado, se le impondría una medida de apremio consistente en una

¹⁷ INE-UT/02588/2023, visible en la foja 363 del expediente electrónico.

amonestación pública, de conformidad con el artículo 35, párrafo 3, del Reglamento.

- **Tercer oficio de supuesto cumplimiento e imposición de una amonestación pública**

- (90) El 12 de abril siguiente, la Consejería Jurídica emitió dos acuerdos distintos. El primero¹⁸, es un acuerdo dirigido al coordinador general de Comunicación Social en el cual le notificó la emisión del acuerdo emitido por la UTCE el once de abril, a fin de que fuera esta oficina la que diera cumplimiento con lo ordenado.
- (91) El segundo¹⁹ acuerdo fue dirigido al encargado de despacho de la UTCE, y ahí se informa que ya se dieron instrucciones a la Coordinación General de Comunicación Social para que dé cumplimiento a lo ordenado por la UTCE, porque esa es la oficina encargada y competente de dar cumplimiento a lo ordenado.
- (92) Finalmente, el doce de abril siguiente la Coordinación General de Comunicación Social remitió un oficio a la UTCE²⁰ por medio del cual comunicó que giró las instrucciones necesarias para llevar a cabo las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar el material requerido. En específico, se señala que eliminó los archivos alojados en YouTube, Twitter y Facebook del Gobierno de México y, por lo tanto, solicita que se tenga por cumplido lo ordenado y se deje sin efectos el apercibimiento.
- (93) No obstante, el veinte de abril siguiente y a raíz de que se ordenó levantar un acta circunstanciada para verificar que, efectivamente, se hayan eliminado los materiales objeto de la medida cautelar, la UTCE emitió el acuerdo que ahora se impugna.
- (94) En esencia, señaló que del acta circunstanciada levantada se advierte que, en el perfil de Twitter del Gobierno de México, las manifestaciones materia del procedimiento aún se encuentran visibles a través de una videograbación denominada “Resumen de las conferencias matutinas del

¹⁸ 114.CJEF.CACCC.2023.08501 visible en la foja 389 del expediente electrónico.

¹⁹ 114.CJEF.CACCC.2023.08508 visible en la foja 392 del expediente electrónico.

²⁰ CGCSyVGR/064/2023 visible en la foja 398 del expediente electrónico



veintisiete al treinta y uno de marzo del 2023” en específico, de los minutos 2:16 a 2:43.

- (95) Así, dado que ya se había apercibido al titular del Poder Ejecutivo Federal, en dos ocasiones, a que cumpliera con lo ordenado en la medida cautelar, se procedería a imponer una amonestación pública en términos de lo previsto en el artículo 35, párrafo 3, del Reglamento.
- (96) Asimismo, se volvió a requerir para que en un plazo máximo de dos horas realizara las acciones necesarias para eliminar el material denunciado, apercibiendo de que de incumplir se le impondrá una multa consistente en 100 UMA, ya que, sería la tercera ocasión en que se concreta la negativa de dar cumplimiento a lo ordenado.
- (97) Ahora bien, en su demanda, el actor señala que la autoridad responsable no observó el contenido del oficio 114.CJEF.CACCC.2023.08501, del doce de abril, porque en él podría haber advertido que el presidente de la República giró instrucciones al coordinador general de Comunicación Social para que acatara lo ordenado por la UTCE.
- (98) A juicio del actor, con esto se mostraba el cumplimiento de lo ordenado porque el presidente de la República se encuentra posibilitado para realizar las acciones materia del requerimiento, y que esto le corresponde al coordinador general de Comunicación Social. Así, señala que la responsable no valoró las acciones que realizó el presidente de la República para cumplir con los requerimientos ordenados.
- (99) El agravio es **infundado**, porque, en primer lugar, de lo narrado se observa cómo la autoridad responsable sí valoró el contenido de los oficios remitidos y que, incluso, fue con motivo de esos oficios que ordenó el levantamiento de diversas actas circunstanciadas para verificar si el material denunciado se encontraba o no todavía visible y, en consecuencia, para determinar si se cumplió con la materia de la medida cautelar.
- (100) Así, el actor parte de la premisa errónea de que los oficios dirigidos a la UTCE por medio de los cuales tanto la Consejería Jurídica, como la Coordinación General de Comunicación Social informaban que ya habían ordenado la eliminación del material respectivo eran suficientes para tener por cumplidos los distintos requerimientos realizados. Esto, porque para tener por cumplida la medida cautelar decretada era necesario que se

eliminara el material objeto de la cautelar y que este no estuviera visible, tal y como se ordenó en el acuerdo ACQyD-INE/42/2023.

- (101) Por ello, no era suficiente que se remitieran oficios por medio de los cuales se informaba que ya se habría ordenado eliminar el material objeto de la cautelar, sino que era necesario que ese material no se encontrara visible, tal y como lo estipuló la autoridad responsable.
- (102) Así, se considera que el análisis probatorio que llevó a cabo la UTCE sí fue exhaustivo y adecuado, pues si bien advirtió la existencia y el contenido de los oficios señalados por el actor en su demanda, lo cierto es que advirtió que, de las actas circunstanciadas levantadas, seguían visibles los materiales denunciados.
- (103) Dado que el acta circunstanciada fue levantada por una persona funcionaria electoral en el ámbito de su competencia, y que tiene fe pública, se trata de una documental pública con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 15, párrafo 4 y 16, párrafo 2 de la Ley de Medios.
- (104) Por otra parte, destaca que la parte actora tampoco mostró elementos probatorios que desmintieran los resultados del acta circunstanciada, de forma que, a pesar de que los oficios referidos por el actor fueron emitidos por una autoridad pública, lo cierto es que fueron insuficientes para desvirtuar las conclusiones a las que arribó la autoridad responsable con base en las actas circunstanciadas levantadas.
- (105) De todo lo anterior, se concluye que no le asiste la razón al actor y que la UTCE sí fue exhaustiva en su análisis probatorio.

6.2.3. Nulidad del contenido y alcance del acta circunstanciada del veinte de abril

- (106) El actor solicita que se deje sin efectos el contenido del acta circunstanciada del veinte de abril por medio del cual se constató que no se había cumplido con lo ordenado por la UTCE.
- (107) Señala, en primer lugar, que el día en que se levantó esa acta circunstanciada ya se había eliminado el material denunciado y, en segundo lugar, que la firma del encargado de despacho de la UTCE en el acta circunstanciada no coincide con la firma estampada en el acuerdo impugnado.



- (108) Se considera que el agravio es **inoperante**, porque el actor **i)** no ofrece elementos de prueba suficientes y **ii)** basa su agravio en argumentos genéricos, vagos e imprecisos. En efecto, respecto a que el acta circunstanciada del veinte de abril se emitió con posterioridad al cumplimiento de la medida cautelar, el actor no ofrece elementos de prueba suficientes que controviertan el contenido del acta circunstanciada.
- (109) Como se señaló, el acta circunstanciada fue levantada por un funcionario electoral investido de fe pública, de forma que constituye una prueba plena. Así, para poder desmentir su contenido, el actor estaba obligado a presentar elementos suficientes de prueba, o argumentos orientados a desestimar lo determinado por parte de la autoridad responsable, lo cual no sucedió.
- (110) Respecto de la supuesta discrepancia de las firmas, se considera que el actor emite argumentos genéricos e imprecisos, sin que siquiera señale en qué consiste la supuesta diferencia de las firmas.
- (111) Por todo lo anterior, y al resultar infundados e inoperantes los agravios planteados, lo procedente es confirmar el acuerdo impugnado.

7. RESOLUTIVO

ÚNICO. Se **confirma** el acuerdo impugnado.

NOTIFÍQUESE, conforme a Derecho. En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, devuélvase la documentación exhibida.

Así lo resolvieron, por **xxx** de votos, las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario general de acuerdos, quien autoriza y da fe de que la presente sentencia se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.